

Balance de 2006

Balance de 2006 y desafíos para 2007

Luis Armando González
Centro de Información, Documentación
y Apoyo a la Investigación
(CIDA)
pp.157-162

El final de un año es propicio para las evaluaciones de lo ocurrido a lo largo del mismo en los ámbitos económico, político y social; para destacar la dinámica predominante en cada uno de ellos; poner de relieve lo que ha marcado al año en su conjunto, es decir, el dinamismo que le ha dado su perfil distintivo respecto de otros años; y para establecer los desafíos más importantes que tendrán que enfrentarse en el nuevo año. Sin duda, determinar el dinamismo fundamental que ha marcado el año 2006 no es fácil en un país como El Salvador, donde son tantos los problemas irresueltos y tanta la incertidumbre social acumulada. Sin embargo, el esfuerzo en tal sentido no es vano, puesto que identificar aquello que diferencia a 2006 de años anteriores puede ayudar a comprender los ritmos y los desafíos futuros de una sociedad que para muchos se encamina hacia el despeñadero. Un balance crítico de 2006 es el punto de partida para la identificación de los desafíos que se plantean al país en 2007. Precisamente, esa es la lógica que guiará estas reflexiones, lo cual quiere decir que, en un primer momento, se examinarán los ámbitos económico y socio-político, con lo cual se tendrán pistas para identificar la dinámica global de El Salvador en el año que acaba de finalizar. En un segundo momento, se anotarán algunos de los grandes desafíos que se le presentan a la sociedad salvadoreña en el año que inicia.

En materia económica ha quedado claro, en 2006, que el modelo económico terciarizado ha llegado a su límite como un esquema de acumulación capaz de autorreproducirse sólo desde la expansión del sector financiero-comercial. Haber sacrificado la agricultura y la industria local en aras de un modelo de crecimiento anclado en los servicios —dependiente

de las remesas, los capitales golondrina y protegido por el Estado—, no ha sido una buena apuesta de largo plazo para el conjunto de la sociedad ni para los sectores tradicionales de poder económico que no lograron reconvertirse, de industriales y agricultores, en banqueros o socios de las grandes empresas transnacionales. Para decirlo gráficamente, convertir las antiguas haciendas cafetaleras —por ejemplo, las ubicadas en el Volcán de San Salvador, en Ahuachapán y Santa Ana— en hoteles y restaurantes no fue lo mejor que pudo sucederle a un país que urge de empleos estables, cualificados y relativamente bien remunerados. Ya antes la decisión de involucrarse —con recursos propios, con préstamos al sistema financiero o mediante la venta de terrenos— en la construcción de viviendas exclusivas (y no tan exclusivas) había mostrado a los antiguos hacendados que ese no era un negocio que se pudiera sostener en el largo plazo. Las familias y empresas excluidas del modelo económico predominante, sin embargo, no han hecho sentir su malestar de forma abierta y militante a los gobiernos de ARENA. Más bien se han conformado con pequeñas dádivas gubernamentales —subsidios y exenciones fiscales, por ejemplo—, otorgadas más en razón de la tradición de derecha de algunas de esas familias y empresas que con ánimo de potenciar su inserción en el modelo económico establecido.

Lo anterior no quiere decir que el futuro inmediato de quienes se benefician del modelo terciarizado sea incierto. Al contrario, visto desde sus particulares intereses, la situación no pudo ser mejor en 2006: sus ganancias fueron más de las esperadas, a tal grado que su éxito se ha convertido en sinónimo de éxito para El Salvador, de cuyo crecimiento económico hacen alarde no sólo sus beneficiarios exclusivos, sino también el gobierno de Antonio Saca. Es cierto que en los mismos círculos empresariales se han escuchado voces disonantes con esta algarabía por los presuntos logros económicos alcanzados en 2006: son las voces de quienes no obtuvieron lo que esperaban en concepto de ganancias y utilidades. Pero los ganadores tienen motivos de sobra para ufanarse de lo bien que les ha ido con este modelo terciari-

zado hecho a su medida. Quienes no tienen motivos para alegrarse, en lo absoluto, son los sectores mayoritarios del país, pues son ellos, en definitiva, los grandes perdedores del descalabro del aparato económico, con sus consecuencias sociales y medioambientales. Porque no hay que llamarse a engaño: la depredación económica ejercida por el modelo terciarizado no puede continuar indefinidamente. Hay límites económicos para la misma, y estos tienen que ver con la inviabilidad económica de un modelo que, por definición, no se basa en la productividad, sino en la rentabilidad de transacciones financieras alimentadas por el impresionante flujo de remesas que a diario llegan al país. Las remesas (el combustible principal del modelo terciarizado) no son eternas; y aunque lo fueran, sólo podrían contribuir a la viabilidad económica del país si potenciaran el despegue de los sectores agrícola e industrial. En la situación actual, atrapadas como están en las redes del sistema financiero-comercial, sólo contribuyen a desarticular aun más el aparato económico, enriqueciendo exageradamente a quienes controlan los circuitos comerciales y financieros del país.

Pero también hay límites medioambientales y sociales. Sobre los primeros, es evidente que convertir a El Salvador en una inmensa planicie urbana, atiborrada de centros financieros y comerciales, es una locura de enormes proporciones. No es que en la cabeza de los asesores financieros de las grandes corporaciones no quepan ideas de ese tipo. Pero eso, desde el punto de vista de la sociedad, sumergiría al país en un caos socio-ambiental sin precedentes; caos del cual ya comienzan a vislumbrarse algunas consecuencias, tal como lo han puesto de manifiesto sucesivas inundaciones, que en los últimos años han afectado a San Salvador y que están asociadas a las construcciones de centros comerciales realizadas en la zona de El Espino. No obstante, no sólo se trata de límites medioambientales, sino también de límites sociales. Y es que el modelo terciarizado, por improductivo y concentrador de la riqueza, ha condenado a la exclusión a amplios sectores de la población. Una de las caras de la exclusión es la incontenible dinámica migratoria

hacia Estados Unidos, la cual que no sólo tiene un impacto decisivo en la economía, sino también en la cultura y las estructuras familiares. Con todo, no se trata sólo de eso. Porque también en el marco de ese modelo se ha socavado la capacidad del Estado para regular y dirigir al conjunto de la sociedad. Esta última, abrumada por la pobreza, sometida a amenazas de todo tipo y con unos referentes de autoridad política diezmados en su credibilidad, se ha volcado a las tareas de supervivencia sin importar los medios usados, incluida la violencia. En 2006 fue palmaria la ruptura del nexo social en El Salvador, lo cual, además de anomia, ha traído consigo una insolidaridad generalizada, así como dificultades serias para la articulación de un movimiento social que haga resistencia activa y efectiva el avasallamiento económico del que es víctima.

Decir que el nexo social se ha roto en El Salvador es una afirmación gruesa que, de ser cierta, debería ser motivo de preocupación para quienes tienen en sus manos la dirección de la sociedad salvadoreña. Porque no pueden fraguarse proyectos colectivos que tengan como meta una mayor humanización de la sociedad —lo cual supone avanzar hacia mayores niveles de inclusión, justicia económica y participación democrática— si el tejido social se encuentra profundamente deteriorado. Los elevados niveles de violencia son un síntoma de ese deterioro, como también lo son la corrupción, los abusos de todo tipo y la proliferación de actividades económicas ilegales, muchas de ellas orientadas a la supervivencia.

Por otra parte, en 2006 se profundizó el divorcio entre la política y la sociedad. ARENA, mal que bien, mantuvo sus alianzas con la Democracia Cristiana y el PCN. Gracias a ellas, su influencia en la Asamblea Legislativa ha sido la de siempre, es decir, la de hacer del Congreso una caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo. En virtud de ello, desde el Órgano Legislativo no se ha interpelado como es debido al presidente de la República cuando éste ha fallado en sus responsabilidades como gobernante y tampoco se ha puesto en práctica la rendición de cuentas, un mecanismo

fundamental para la salud de la democracia. Si a ello se suma el amarre con la derecha al que está sometida la Corte Suprema de Justicia, en el país la separación de poderes no pasa de ser una ficción. Una ficción peligrosa, sin duda, porque su contrapartida real es el debilitamiento del Estado no sólo en su capacidad de presión y negociación ante los distintos grupos de poder, sino en su capacidad de controlar (e imponer su autoridad en) el territorio nacional. En la práctica, es como si en El Salvador no hubiera Estado: los grupos de poder financiero, aliados a conglomerados transnacionales, lo utilizan a su antojo, según su propia conveniencia; las bandas del crimen organizado lo desafían permanentemente, ocupando determinadas zonas del país, en las cuales imponen su propia ley; y la mayor parte de la población desconfía de las autoridades y, en su punto más bajo, de los políticos. Estamos, pues, ante un modelo estatal agotado y en franca crisis. Es decir, urge replantear el tema del Estado, orientando el debate hacia la conquista de un Estado democrático de derecho.

Formalmente, el ámbito político funciona según su tónica usual. En marzo, hubo elecciones para elegir diputados y alcaldes, después de las cuales —tras unos breves conatos e inconformidades entre dirigentes y militantes de los distintos partidos, en particular de ARENA y del FMLN— todo volvió a la normalidad; el presidente Saca, después de haber confundido sus roles como presidente del COENA y Presidente de la República, se dedicó a lo suyo: sonrisa y promesas para las cámaras; los diputados discutieron y se encolerizaron (o hicieron chistes), todo para el gusto de una prensa ávida de noticias inocuas; se tiene hoy un nuevo Ministro de Seguridad y Justicia, quien insiste en que ahora sí se está combatiendo eficazmente el crimen, pese a que como Ministro de Gobernación fracasó en esa tarea; el Fiscal General de la República blande su puño amenazante contra los criminales... Todo esto, sin embargo, es mero ritual político, un ritual que en nada ayuda a los salvadoreños y salvadoreñas de a pie a resolver sus problemas cotidianos: conseguir el sustento diario, buscar

dinero para la medicina del hijo o la hija que tiene diarrea, resguardar su vida y sus bienes en los asaltos en microbuses y autobuses o en la misma calle donde se habita, reunir como sea el dinero y el valor para irse de forma ilegal para Estados Unidos... Esta es la vida real de la mayor parte de la población.

En otras palabras, El Salvador está atravesado por una dinámica contradictoria. Por un lado, se tiene al gobierno, realizando una propaganda en la cual se presenta un país que cada día camina mejor y en el rumbo correcto. Pero, por el otro lado, está la situación real del país, manifestada en los altos índices de violencia y de inseguridad, y en los problemas económicos que aquejan a diario a la mayoría de la población. El discurso y la propaganda del gobierno crean un mundo de fantasía, contrapuesto al mundo real de los salvadoreños y salvadoreñas. Esa dinámica no es nueva. De hecho, desde 1989 hasta el día de ahora, ARENA y los grandes medios de comunicación se han especializado en maquillar la realidad. Lo grave es que ello, lejos de resolver los problemas, los ha agravado hasta niveles francamente críticos. De aquí que un desafío que se impone para 2007 es desmontar ese país de fantasía para luego atender las necesidades y urgencias de quienes peor viven en el país real.

Se trata, sin embargo, de un desafío difícil de enfrentar, en tanto que quienes detentan el poder político y económico no están interesados en que el país real —el país de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas— tenga primacía sobre el país de fantasía. Los primeros porque su afán es conseguir cuotas de poder estatal; un poder, por cierto, cada día más hueco. Los segundos, porque quieren riqueza y más riqueza, sin importar los costos sociales, ambientales, institucionales y políticos. Y quienes están en la base de la pirámide social deben soportar la desidia de unos y otros. Soportar quiere decir no reclamar ni protestar, aceptar las cosas como son y jugar según las reglas de juego establecidas por quienes están arriba. Estas reglas exigen abusar de los más débiles, expoliar a quien se deje, erigir a

la riqueza como bien supremo y convertir a quienes la concentran y disfrutan en modelos a seguir.

Dicho lo anterior, ¿qué es lo que diferencia a El Salvador en 2006 en relación a otros años? A primera vista, nada. Persisten los males endémicos de siempre: exclusión, pobreza, vulnerabilidad, inseguridad. Sin embargo, hay algo que, aunque sutil, es nuevo: la sociedad salvadoreña, como proyecto de convivencia colectiva, está al borde del precipicio. Nadie suele (o quiere) decirlo con esas palabras, pero por donde quiera que se lo vea El Salvador actual es inviable como proyecto de sociedad. No se trata, por tanto, de si tal o cual aspecto del país está mal; esta es una etapa superada en la discusión sobre el proceso salvadoreño. Insistir en esa discusión centrada en detalles es perder de vista lo sustantivo. Y es que, en la actualidad, son inviables el modelo económico, el sistema político, las instituciones, la legalidad estatal y la sociedad en su conjunto. Ahora más que nunca, pues, el debate debe girar en torno a qué proyecto de sociedad se le va a apostar. Y esto, además de lucidez, requiere dejar a un lado intereses mezquinos, cuyo foco de atención es únicamente el propio bolsillo o cuotas nimias de poder político que apenas permiten obtener algunas migajas de la riqueza que les rebalsa a los ricos más ricos de El Salvador.

¿Qué decir de los inicios del nuevo año? Pues bien, el año 2007 hereda los males acumulados no sólo durante 2006, sino en años anteriores. Para comenzar, hereda el problema de la violencia. Según estimaciones preliminares, diciembre de 2006 dejó una cifra de 100 homicidios (de un total de 3,781 ocurridos durante todo el año), mientras que, en la primera semana de enero de 2007, un motín en el Penal de Apanteos dejó no menos de 20 reos asesinados a manos de pandilleros. La violencia, en este sentido, constituye uno de los principales problemas de la sociedad salvadoreña, pero no es el único. Junto a ella están los mecanismos de exclusión prevaletentes, el deterioro institucional, la concentración abusiva de la riqueza, el divorcio existente entre la sociedad y el Estado, la

impunidad, la corrupción, el deterioro de los recursos naturales y la migración. Es decir, El Salvador tiene un cúmulo de problemas irresueltos —económicos, sociales, institucionales, políticos, culturales, medioambientales—, articulados entre sí de manera sistemática y cuya solución, en consecuencia, debe ser integral.

Esos problemas plantean una serie de desafíos a la sociedad salvadoreña en su conjunto, pero en particular a quienes concentran en sus manos cuotas importantes de poder político, económico y cultural. ¿Cuáles son, en términos amplios, esos desafíos? En primer lugar, una discusión a fondo, honesta y realista, del modelo de país que se tiene y del modelo de país que se quiere. Hay quienes, sin duda, están contentos con El Salvador actual, pese a los graves desequilibrios que lo caracterizan. Sin embargo, aun en contra de quienes no quieren ver sus males estructurales, esos males deben ser examinados en detalle. Seguir viviendo en un país de ilusiones no hace más que agravar los problemas, impidiendo su solución cuando ella todavía es posible. Reconocidos los problemas en toda su dimensión, el paso siguiente consiste en comprometerse por un país distinto, lo cual supone una reflexión amplia y concienzuda sobre cómo este debería ser en los planos económico, político, social y medioambiental. No se trata de impulsar foros y debates amañados, en los que se excluya a las voces más críticas de la sociedad, sino todo lo contrario: se trata de convocar a esas voces críticas —eclesiales, universitarias, sindicales, profesionales—, ya que ellas constituyen la mejor garantía contra los intentos de manipulación que puedan surgir desde la esfera política.

En segundo lugar, la definición y concreción de los mecanismos institucionales, económicos y políticos que permitan superar los males prevalentes en El Salvador actual, así como dar paso a un orden socio-económico y político distinto al establecido. Se trata de elaborar los diseños institucionales más adecuados para orientar al país por unos derroteros en los cuales la democracia se complemente con la inclusión socio-económica; se trata también de formular y ejecutar las políticas públicas que

sean coherentes con esos derroteros. El tiempo de las improvisaciones interesadas ya pasó; ha llegado el momento de pensar en un verdadero plan de nación, cuya implementación sea de carácter obligatorio para cualquier partido o líder que dirija al país desde el Ejecutivo. En esto no se parte de cero: los Acuerdos de Paz y el Plan de Nación elaborado durante la administración Calderón Sol son un buen punto de partida. Asimismo, cualquier documento fundacional debe adquirir rango constitucional, pues de lo contrario lo que de bueno haya en el mismo quedará sometido a los vaivenes de la política inmedatista y miope. Aquí urgen los consensos no sólo políticos, sino también empresariales y sociales. Pero también urgen los compromisos y la responsabilidad para cumplir con lo acordado.

En tercer lugar, la creación de una nueva cultura ciudadana, imbuida de valores democráticos imprescindibles como la responsabilidad, la tolerancia, el respeto a las leyes, la participación en los asuntos públicos y el rechazo a los abusos de los poderosos. Esta es una tarea de largo aliento y cualquier esfuerzo que se haga desde las escuelas, las universidades y los medios de comunicación siempre será poco dado el arraigo de valores autoritarios de viejo cuño entre amplios sectores de la población. La cultura autoritaria —esa que privilegia el uso de la fuerza, la prepotencia y el abuso sobre los más débiles— debe ser erradicada de una buena vez, si es que se quiere construir una sociedad menos violenta, más solidaria y fraterna. Los cambios culturales no sólo son lentos, sino difíciles. Sin embargo, la cultura no sólo dota de símbolos y de sentido el comportamiento de los individuos, sino que lo orienta en una dirección o en otra. De tal manera que si se incide en los valores y creencias de los ciudadanos, muy probablemente se estará incidiendo en su forma de comportarse y de elegir. En su oportunidad, Ignacio Martín-Baró insistió en que las acciones de los individuos sólo se explican por su horizonte ideológico; vale decir, por su horizonte cultural, porque el universo ideológico de cada cual está formado por valores, símbolos, creencias y tradiciones que son, en sí mismos, creaciones culturales.

Por último, un cuarto desafío apunta al fomento de la participación ciudadana. Tradicionalmente, a las elites de poder en El Salvador no les ha gustado ver a los sectores populares en las calles. Consecuentes con su secular autoritarismo, han preferido un pueblo pasivo y conformista a uno activo y partícipe de las transformaciones requeridas por el país. Sin embargo, si de lo que se trata de es de construir una sociedad más democrática, inclusiva y solidaria, ello sólo podrá lograrse con la participación de quienes, en definitiva, serán los destinatarios de esa nueva sociedad. Ya se ha intentado andar el camino de las transformaciones sin tomar en cuenta a la sociedad. Ahora ese camino debe ser recorrido junto con ella, lo cual requiere de su organización y su participación en los debates y consensos acerca del rumbo futuro de El Salvador.

En definitiva, la tesis de que el país está al borde del abismo (con la que se concluye el balance de 2006 en estas reflexiones) debe completarse con otra que sostiene que, justamente por estar al borde del abismo, al país se le abren un conjunto de desafíos que, de ser enfrentados como es debido en 2007, pueden abrir un horizonte de posibilidades inéditas para el conjunto de la sociedad. Ahora más que nunca se hacen necesarias la creatividad política, el compromiso público y la responsabilidad compartida.

En 1972, el economista brasileño Celso Furtado escribió algo que, pese al tiempo transcurrido desde entonces, sigue teniendo validez para muchos países latinoamericanos, entre ellos El Salvador:

“Nuestro problema principal es contar con poblaciones que puedan manifestar en forma consistente su voluntad y que permitan el surgimiento de auténticas dirigencias. Sólo así podrán ser identificados los verdaderos problemas sociales. Sólo así se podrá hablar de desarrollo. Si la identificación de los problemas del pueblo permanece como atributo exclusivo de minorías privilegiadas... continuaremos confundiendo desarrollo con expansión del consumo suntuario, e ignorando que la mortalidad infantil va en aumento... Más allá de la satisfacción de las necesidades elementales de la población, nada es tan importante como alcanzar formas superiores de convivencia social. Este objetivo sólo puede ser logrado en una sociedad abierta al diálogo y a la participación. Y ningún diálogo es más difícil ni más fundamental que el que tenemos con la nueva generación. Hacer la guerra a la juventud, tratar de destruir su deseo de lucha es comprometer considerablemente el futuro de un pueblo”¹.

1. Celso Furtado, *Los vientos del cambio*. México, FCE, 1993, pp.247-248